



20000033672764
Zona

SS

Sala II

Fecha de emisión de la Cédula:06/febrero/2020

Sr/a:GASTON ARMANDO MIANI

Domicilio:20239678050

Tipo de domicilio

Electrónico

Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

Copias: S

Tribunal:CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2 - sito en Lavalle 1268, 8vo Piso, CABA

20000033672764

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. **66274 / 2016** caratulado:
CARLOS ISLA Y CIA. S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:
Según copia de sentencia que se adjunta.- Según copia que se acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: LEONARDO BOLASINI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



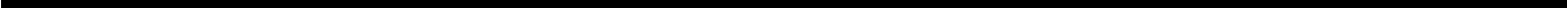


20000033672764
Zona

SS

Sala II

Fecha de emisión de la Cédula:06/febrero/2020





20000033672764
Zona

SS

Sala II

Fecha de emisión de la Cédula:06/febrero/2020

Sr/a:GASTON ARMANDO MIANI

Domicilio:20239678050

Tipo de domicilio

Electrónico

Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

Copias: S

Tribunal:CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2 - sito en Lavalle 1268, 8vo Piso, CABA

20000033672764

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. **66274 / 2016** caratulado:
CARLOS ISLA Y CIA. S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:
Según copia de sentencia que se adjunta.- Según copia que se acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: LEONARDO BOLASINI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



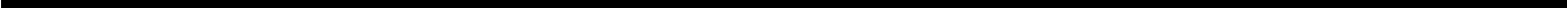


20000033672764
Zona

SS

Sala II

Fecha de emisión de la Cédula:06/febrero/2020





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA Nº66274/2016

Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos **CARLOS ISLA Y CIA. S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA**, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

CARLOS ISLA Y CIA S.A. apela la Resolución Nº 160/2013(DV RNEU), que no hace lugar a impugnación de deuda determinada por los periodos octubre /2008 a noviembre /2010, toda vez que la contribuyente ingresó esas obligaciones conforme lo normado en el inc. b) del art.2 del Decreto 814/01, cuando, según el organismo, debió hacerlo por la alícuota dispuesta en el inciso a).

El apelante no ha cumplido con el depósito previo de la suma cuestionada, conforme lo establecido en la ley 18.820, art. 15 y cc. adjuntando en su reemplazo un seguro de caución, el cual es considerado un sucedáneo valido de tal imperativo legal.(v. C.S.J.N. en la causa "Orígenes A.F.J.P. (sent. del 04.11.08, Fallos 331:2480)

Ello así, propicio entender en el recurso impetrado.

En su memorial recursivo, el apelante sostiene que el tope de facturación que correspondía tomar en cuenta era el de \$ 88.800.000 establecido por la resolución 147/2006 de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y de \$111.900.000, según resolución Nº 21/2010. No el de \$ 48.000.000, que aluden tanto el decreto 1009/01, cuya inconstitucionalidad peticiona. Ratifica su calidad de PyMES. Afirma que durante el periodo de determinación estuvo encuadrada en la alícuota reducida del 17% porque cumplía con las condiciones fijadas por la autoridad de aplicación mediante las resoluciones 24/01, 675/02; 147/06 y 21/10 para el fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas PyME. Señala que AFIP omitió tomar en cuenta que el art. 1 del decreto 1009/01 y también la RG 1095 AFIP sólo se refieren a los contribuyentes comprendidos en el inc. a) del decreto 814/01 no a los excluidos como es su caso, si así no fuese serian inconstitucionales porque violarían lo dispuesto por el dec. 814/01 (texto según la ley 25453) excediendo las facultades reglamentarias, art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional. Señala que las leyes 24.467 y 25.300 no definen el concepto de PyME sino que encomiendan esa tarea a la autoridad de aplicación, por lo tanto,



#28775617#252519895#20191213130946150

la SePYME es la autoridad de aplicación para establecer si una empresa es PyME o no, lo que dicho órgano estatal hizo mediante la resolución 147/06 Destaca que no supero el tope de facturación fijado por la resolución 147/06 por lo que es indiscutible su encuadre en la alícuota reducida del decreto 814 del año 2001. Cuestiona los intereses y la multa

Así las cosas, estimo que no le asiste razón al recurrente en el planteo incoado. Conforme surge de la normativa en análisis, el dec. 814/01), art. 2 inc. b) (cfr. modificación practicada por la ley 25.453), consagro una alícuota reducida del 16% en concepto de contribuciones patronales para los empleadores que encuadren como PYME en los términos previstos por la ley 24.467. Esta ley, encomendó a la autoridad de aplicación, definir las características de las empresas que serían definidas como PYMES (conf. art. 2). A su vez, el art. 83 de la ley, definía a las PYMES como aquellas que posean un plantel que no superen los 40 trabajadores (inc. a), o que tuviesen una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del art. 104 de la ley (inc. b). El art. 105, creaba la Comisión Especial de Seguimiento, una de cuyas funciones era determinar el monto de la facturación anual, a los efectos previstos en el art. 83 mencionado.

El dec. 943/97, de incorporación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, al ámbito del Poder Ejecutivo, determino como objetivo de la misma “entender en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de la ley 24.467 y de las disposiciones dictadas en consecuencia, en su carácter de Autoridad de Aplicación.

Posteriormente, se sanciona el Dec.146/99 (de reglamentación de la ley Pymes), el cual por su art. 10, estableció que la Comisión Especial de Seguimiento, a fin de evaluar la procedencia de la modificación del monto de facturación anual previsto en el inc. b) del art. 83 de la ley 24.467, debía reunirse una vez al año, constituyendo la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente de la Presidencia de la Nación, como un organismo de consulta de esa Comisión.

Con la sanción de la ley 25.300 (ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa), de nuevo se derivó en la autoridad de aplicación, definir las características de las empresas que serán consideradas como tales (art. 1). En esta inteligencia, es que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, sanciona la Res. 24/01 que establece los montos de facturación, a los fines del encuadramiento





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

como PYME (de \$ 48.000.000 para el caso de comercio y de \$ 12.000.000, para el caso de servicios).

A su turno, el PE. mediante la sanción del dec. 1009/01, dispuso aplicar la pauta numérica de la Res. 24/01 a los efectos de delimitar la excepción consagrada por el art. 2 inc. a) del Dec. 814/01, criterio éste que es seguido por el organismo fiscal, con la sanción de la Res. Gral n° 1095

En esta inteligencia, el problema que se suscita en autos, radica en que en el año 2002, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dictó la Res. 675/02, por el cual actualizó los montos a los fines de la configuración del carácter de una empresa como Pyme, estableciendo el mismo en la suma de \$ 86.400.000 para el comercio y de \$ 21.600.000 para servicios, normativa ésta que no es recepcionada por resolución fiscal alguna. Pero conforme surge de los considerandos de la Res. 24/01, como de la Res. 675/02, las mismas fueron dictadas a los fines de reglamentar el art. 1 de la ley 25.300, ley ésta que tenía por objetivo el fortalecimiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas, situación ésta que se vio plasmada, entre otros instrumentos, por el art. 2 de la ley en cuestión, a través del cual se crea el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto de realizar aportes de capital y brindar financiamiento a la mismas, y no a los fines de reglamentar la ley 24.467. En consecuencia, y tal como lo sostiene el organismo fiscal, la norma en cuestión fue reglamentada a los fines de la excepción prevista por el art. 2 inc. a) del Dec. 814/01, a través del Dec. 1009/01 y de la Res. Gral. de la Afip N° 1095, que en su momento, decidieron adoptar la pauta numérica referida por la Res. 24/01, pero que no implica que las posteriores actualizaciones que se realicen sobre la misma, impacten sobre el monto normado por el Dec. 1009/01, en la medida en que el Poder Ejecutivo, no lo determine. Por lo que se confirma lo resuelto por el organismo.

En el caso de multas previsionales, la constatación de la infracción genera la siguiente responsabilidad y sanción del infractor. Por tal razón, y siendo la finalidad de la multa impuesta(Resolución 1566), castigar el ingreso tardío de los aportes con que se necesitan contar en tiempo oportuno para la financiación del sistema, resulta innecesaria la atribución de culpa o dolo para la imposición de la sanción, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada en este aspecto. En tal sentido, este Tribunal tiene dicho que "...en el caso de las multas previsionales, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al



infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatória válida (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 19.10.98, "Pilot Pen S.A.", criterio éste seguido por la Sala I del fuero en autos "ROCA ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda", sent. def. 125851, del 26/9/08).

Por las razones expuestas, Resuelvo: 1) Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto; 2) Confirmar la resolución recurrida; 3) Costas a la vencida (art. 68 CPCCN.). Regúlense los honorarios profesionales de los letrados intervinientes de la parte actora y demandada, en el 3% y 5% respectivamente de la suma reclamada en autos.(art. 8Ley 21.839 mod. por art. 12 ley 24.432).

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO:

Adhiero al voto que antecede en cuanto a la habilitación de la instancia en virtud del seguro de caución acompañado pero disiento en cuanto al fondo de la cuestión que se plantea.

La AFIP, sostiene que atento que la contribuyente ha superado el importe máximo de \$ 48.000.000 de ventas anuales según lo establecido por el Decreto N° 1009/01 y la Resolución General (AFIP) n° 1095/01, a la misma le corresponde tributar la alícuota establecida en el inciso a) del primer párrafo del art. 2 del Decreto PEN 814/01 (21%).

La recurrente manifiesta que el tope de facturación que correspondería tener en cuenta durante el periodo objeto de determinación debe ser actualizado. Que el decreto 1009/01 tuvo sólo como objeto definir los sujetos que resultan comprendidos en cada uno de los incisos del Decreto 814/01, a fin de establecer la alícuota que debían pagar según fueran considerados PyMEs o no. Sostiene que la empresa debió pagar y así lo hizo, alícuota reducida del 17% por encuadrar en la ley 24.467.

Alega que mediante las resoluciones 24/01, 675/02,147/06 y 21/10, se actualizaron los montos tenidos en cuenta para determinar el encuadre en micro, pequeñas y medianas empresas y, por consiguiente, si resultan alcanzados por los beneficios de las leyes 24.467 y 25.300. Destaca que la empresa, en el periodo en análisis, no superó el tope de facturación fijado por dicha disposición 147/06 lo que hace indiscutible su encuadre en la alícuota reducida del decreto 814/01.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Ahora bien, el beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos, no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de las Resoluciones 24/01, 675/02, 147/06 y 21/10 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

Siendo que el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME, pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por la Resolución 24/01, 675/02, 147/06 y 21/10 y mod., especialmente la Resolución 147/2006, para el periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 "Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda" y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2).

En atención al modo como se resuelvo propicio imponer las costas al organismo (art. 68 y cc. CPCCN).

Por lo expuesto, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en su conjunto en la suma de \$20.000 (art. 13 de la ley 24.432), suma a la que se adicionará el IVA en caso de corresponder

EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:

Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Herrero



#28775617#252519895#20191213130946150

A mérito de lo que resulta del voto de la mayoría y habiendo dictaminado el Ministerio Público el Tribunal RESUELVE Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en su conjunto en la suma de \$20.000 (art. 13 de la ley 24.432), suma a la que se adicionará el IVA en caso de corresponder

: Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y , oportunamente, devuélvase.

La vocalía Nº 3 se encuentra vacante (R.J.N. art. 109)

LUIS RENE HERRERO

Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

MARTIN LACLAU

Juez de Cámara

ANTE MÍ:

AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

mpv



#28775617#252519895#20191213130946150